El ministro Morenés, al servicio de la industria militar

Rafael Gómez Parra

Desde la entrada de España en la OTAN, en 1982, el Ministerio de Defensa se convirtió en un inmenso agujero negro financiero donde, con la excusa de colocar al Ejército español a la altura de sus vecinos europeos y de mejorar la industria de armamentos española, se han ido sucediendo una serie de programas de compra que han llevado a contraer una deuda valorada entre 23.000 y 36.000 millones, que representa de cuatro a cinco veces el presupuesto del Ministerio de Defensa y entre 32 y 36 veces la partida que éste tiene asignada para inversiones en armamento, que es lo que tocará sacar del bolsillo de los españoles (a razón de unos 800 euros extra, como mínimo, por habitante), según la valoración hecha por el ex secretario de Estado de Defensa, Constantino Méndez, que fue segundo de Carmen Chacón en el Ministerio.

Para conocer el origen de la trama armamentística española hay que remontarse a la entrada en el Ministerio de Defensa del dúo formado por Alberto Oliart y su subsecretario Eduardo Serra, en 1982, cuando se inició el llamado “Programa FACA” para la compra a Mc Donell Douglas de 72 aviones EF-18 Hornet (avispón), que se consolidó finalmente el 31 de mayo de 1983, ya con el socialista Narcís Serra y el sempiterno Eduardo Serra al frente de los Ejércitos españoles.

Durante toda esta primera etapa, que dura los trece años largos que estuvo Felipe González de presidente del Gobierno, las compras se dirigen principalmente a la industria norteamericana y concluye en 1995 con la llegada a la base de Morón (Sevilla) de los últimos 24 F-18, de segunda mano, que se adquieren a la Marina yanqui. Y al pasar Narcís Serra a ocupar la vicepresidencia del Gobierno, Eduardo Serra es nombrado ministro.

A la enorme deuda contraída con la compra de los aviones de caza norteamericanos se unió la de la construcción en los astilleros españoles del portaviones “Príncipe de Asturias”, que se había comenzado a fabricar, con el nombre de “Carrero Blanco”, durante los últimos años de Franco. No se pudo botar hasta 1982 y no comenzó a ser operativo hasta 1988. Para dotar al portaviones hubo que hacer nuevas e importantes compras a la industria de armamento norteamericana y europea: doce AV-8 Harrier II y AV-8B Harrier II Plus, seis helicópteros Sikorsky H-3 Sea King, dos Sikorsky H-3 Sea King y cuatro Agusta-Bell AB-212.

LA “CIENCIA” BÉLICA

Cuando Aznar llegó al Gobierno, en 1996, no solo conservó a Eduardo Serra al frente de Defensa, sino que se hizo una revisión profunda del programa de compras al más puro estilo liberal: como los Presupuestos del Estado ya no podían dedicar más dinero a los programas de armamento, la mayor parte de los gastos de inversión se trasfirieron al nuevo Ministerio de Ciencia y Tecnología y, al mismo tiempo, se llegó a un acuerdo con las principales industrias militares para que investigaran y fabricaran armas aplazando su entrega y pago hacia el futuro.

“Esto tiene una primera consecuencia militar -analizan los miembros del Colectivo “Utopía Contagiosa”-. Cuando, dentro de 10, 15 ó 20 años, se entreguen los armamentos, serán más o menos obsoletos e ineficientes. Por ello se tendrá que hacer un nuevo programa que se comenzará a financiar en el presente pero se irá pagando en el futuro y, nuevamente, para conseguir armamento obsoleto. Es decir, se produce un círculo vicioso que nos endeuda cada vez más a cambio de armas que no van a servir. ¿Quién saca beneficio de ello? Las arcas públicas sólo deuda. La industria militar, sin duda, sale ganando, pero no sabemos distinguir cuál es el beneficio para la sociedad española”.

Al frente de este plan, Eduardo Serra puso a su delfín Pedro Morenés, que había comenzado su carrera ya en los Astilleros Españoles con la aventura de portaviones “Príncipe de Asturias” y las Fragatas F-100, nombrado secretario de Estado de Defensa en 1996 para -tras un etapa de dos años como secretario de Estado de Seguridad en Interior, donde existe otro alto nivel de compras de armas- pasar a controlar el Ministerio de Ciencia y Tecnología, también con el cargo de secretario de Estado. Desde allí consolidó sus planes y dio un paso más hacia adelante en el programa de renovación de la industria de armamento española, su integración en la europea EADS, donde se reúnen las empresas privadas y públicas en un totum revolutum pagado con dinero público.

Pedro Morenés fue uno de los principales artífices de la Revisión Estratégica de Defensa que el Partido Popular y el PSOE pactaron en 2002 y que daba el visto bueno a todo el plan de inversiones militares con la excusa de la renovación tecnológica. Durante los últimos años del Gobierno de Aznar, las industrias militares recibieron 14.000 millones de euros en créditos a interés cero, que el Gobierno de Zapatero, primero con José Antonio Alonso al frente y posteriormente con José Bono y Carmen Chacón, ha continuado. En parte por pura convicción y en parte porque las inversiones ya no tenían marcha atrás, como la compra en 2007 de los famosos 24 misiles “Tomahawk” norteamericanos para ser utilizados por las Fragatas F-100 y los submarinos S-80, que se están construyendo.

Precisamente el último trabajo de Pedro Morenés antes de ser nombrado ministro de Defensa, ha sido su participación en la empresa de misiles europea MBDA, dentro del consorcio multinacional EADS. Sin olvidar que su número dos, Pedro Argüelles, que era desde 2002 vicepresidente de Boeing Internacional y presidente de Boeing España y Portugal, había sido director del Gabinete del ministro Eduardo Serra entre 1996 y 2000. Todo queda en casa.

Los “Mortadelos” de Trillo y Morenés y los “Tigres” de Bono

La compraventa de armas, obviamente, tienen amplias connotaciones políticas. Una de las más curiosas tuvo como protagonista a un importante miembro del comando Madrid de ETA, Ignacio Etxeberría, conocido como “Mortadelo”, que había sido detenido en Francia en 1996 y que el Gobierno de Aznar reclamó para que fuera juzgado en España. Para “engrasar” la extradición, Pedro Morenés, entonces convertido en secretario de Estado de Seguridad de Jaime Mayor Oreja, convenció al ministro de Defensa, Federico Trillo, de que decidiera la compra de 16 helicópteros Cougar a la multinacional francesa Aerospatial, lo que evidentemente fue eficaz, y el 20 de febrero de 2001 se producía la entrega por parte de la gendarmería francesa a la

policía española. Desde entonces, a estos helicópteros se les conoce en el Ejército español como los “mortadelos”. Fue precisamente con estos helicópteros con los que Aznar y Trillo ocuparon la isla de Perejil en 2003, iniciando su escalada militar, que acabaría apoyando la guerra de Irak.

Durante los dos años que José Bono estuvo al frente del Ministerio de Defensa sólo hizo dos cosas “memorables!: la primera fue la “Operación Campamento”, en Madrid, que suponía la venta de un millón de metros cuadrados de antiguos cuarteles, que cerró finalmente, seis años más tarde, Carmen Chacón y que han supuesto un ingreso de 150 millones de euros para las maltrechas arcas ministeriales. La segunda consistió en llevarse a su provincia natal, Albacete, la fábrica de helicópteros “Tigre” (Eurocopter EC665), que la multinacional de las armas EADS montó en España de acuerdo con los intercambios programados con el Gobierno de Zapatero.